







da cuenta con las manifestaciones vertidas por la parte quejosa.

**El Secretario en Funciones de Juez acuerda:** con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las manifestaciones de la parte quejosa en vía de alegatos y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Con lo que se concluye el período de referencia.

Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se celebra la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda; y,

## RESULTANDO

**PRIMERO. Presentación de la demanda.** Mediante escrito presentado vía electrónica el siete de agosto de dos mil veinte, y recibido por razón de turno a este órgano jurisdiccional el doce siguiente; \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y actos que a continuación se señalan:

"(...)

### II. AUTORIDADES RESPONSABLES.

- a) **AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS (...)**
- b) **SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (...)**





c) **DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (...)**

**III. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA.**

*El Acuerdo por el que se modifica el artículo 31 de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2020.*

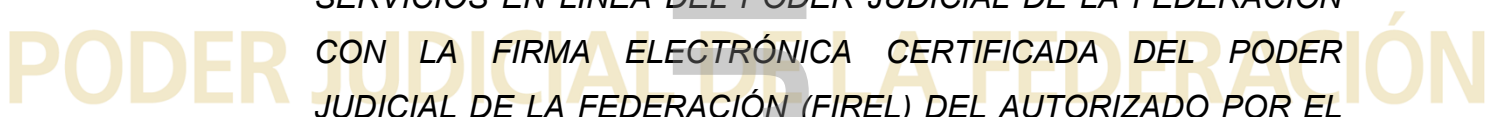
(...)"

**SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados.** La parte quejosa indicó que no existía tercero interesado; narró los antecedentes del acto reclamado; señaló como derechos violados los reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y formuló los conceptos de violación que estimó conducentes.

**TERCERO. Desechamiento parcial y prevención.** Por auto de **catorce de agosto de dos mil veinte**, se registró la demanda con el número **751/2020**; de igual forma, se desechó únicamente por lo que hace a \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* , asociación civil, por conducto de su apoderada \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*; lo anterior, dado que el escrito inicial carece de la firma electrónica de ésta última, es decir, no existe manifestación de la voluntad por cuanto hace a la referida asociación para acudir a la presente instancia constitucional; lo anterior, con base en lo establecido por la jurisprudencia de rubro: *“DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE”*.



Por otra parte, se requirió al promovente, \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , para

que desahogara la prevención ahí formulada, esto es, para que precisara con exactitud qué acto o actos reclama en concreto de las autoridades señaladas como responsables, Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Diario Oficial de la Federación.

#### **CUARTO. Desahogo, recurso de queja y admisión.**

Por escrito recibido en la Oficialía de Partes el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, y registrado con el folio 7045,

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* ,

desahogó la prevención formulada en autos en los siguientes términos:

“(..)

*Precisión de actos reclamados: En cumplimiento del requerimiento realizado, a continuación se indica qué acto se reclama de cada autoridad señalada como responsable:*

- *Al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se les reclama la emisión del “Acuerdo por el que se modifica el artículo 31 de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil veinte”, por lo motivos y razonamientos señalados en el escrito inicial de demanda.*

- *Al titular del Diario Oficial de la Federación se reclama la publicación del “Acuerdo por el que se modifica el artículo 31 de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil veinte”, por lo motivos y razonamientos*



señalados en el escrito inicial de demanda.

(...)"

Por otra parte, inconforme con el desechamiento parcial de la demanda de amparo por lo que hace a \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*, asociación civil; a través del diverso ocurso recibido en este Juzgado de Distrito en la misma fecha, y registrado con el folio 7048, la parte quejosa interpuso recurso de queja.

En atención a lo anterior, mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional.

De igual forma, en el auto en cita se dio trámite al recurso de queja interpuesto en contra del desechamiento parcial de la demanda de amparo por cuanto hace a \*\*\*\*\* \*\*\*, asociación civil.

**QUINTO. Suspensión del procedimiento.** En auto de siete de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, informando que admitió el recurso de queja interpuesto en contra del desechamiento parcial de la demanda de amparo, registrándolo con el toca número \*\*\*\*\* , de su índice; en consecuencia, se suspendió la tramitación del presente asunto en tanto dicho medio de impugnación fuera resuelto; por ende, se dejó sin efectos la

Jesus Coronel Montiel  
70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.08.7b  
06/07/23 10:43:49

















Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro **“INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE”<sup>2</sup>**.

Igualmente, se cita la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro **“INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO”<sup>3</sup>**.

En ese sentido, para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen en el mismo deriven de un acto concreto de autoridad que cause algún perjuicio o

<sup>2</sup> Jurisprudencia de la Décima Época, número de registro 2012364, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, agosto de 2016, Tomo II, página 690 que refiere: *“La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”*.

<sup>3</sup> Tesis de la Décima Época, número de registro 2003067, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1736 que refiere *“La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto “interés legítimo individual o colectivo”, ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su “especial situación frente al orden jurídico”, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella”*.













acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción.

Así, el **interés legítimo** solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico.

El interés legítimo **implica un vínculo entre una persona y una pretensión**, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo **en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto**; empero, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple.

En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.

Cabe aclararse que tal parámetro de razonabilidad, no se refiere a los estándares argumentativos para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, **esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación**; por tanto, dicho término se refiere a la









responde a dos supuestos distintos: en el primer caso, el interés se refiere al número de personas que tienen el mismo, **mientras que el segundo término se refiere al nivel de intromisión o afectación en la esfera jurídica del gobernado**; es decir, no pueden equipararse los términos ni pueden ser empleados como sinónimos, toda vez que su configuración responde a criterios diversos, sin que ello implique que no puedan coexistir en el mismo procedimiento.

Así las cosas, resulta posible que el interés legítimo en determinado caso también sea difuso o colectivo, pero tal supuesto no resulta forzoso, pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual, existe un interés legítimo individual, en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas.

En otras palabras, no resulta jurídicamente factible equiparar el interés legítimo con el diverso colectivo o difuso, pues tal circunstancia no resultaría armónica con la naturaleza del juicio de amparo ni con el principio *pro persona*, ya que ello significaría restringir de forma excesiva el acceso al mismo, al impedir que ciertas personas que posean un interés individual y diferenciable pero que no derive de la titularidad de un derecho subjetivo, puedan acceder al juicio de amparo, situación que se reitera, resultaría contraria al nuevo paradigma en materia de derechos humanos prevista en nuestro texto constitucional.





e) **Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida.**

f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio.

g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial.

h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible.

i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, no se constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que se establecen los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés.

j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de











Instalaciones nuevas e Instalaciones existentes de los Proyectos en las que se realicen las siguientes actividades del Sector Hidrocarburos: a) la exploración y extracción de hidrocarburos, b) el tratamiento, refinación y almacenamiento del petróleo, y c) el procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación, así como el transporte por ducto, almacenamiento y distribución de gas natural.

Que a la luz del considerando anterior, el universo de instalaciones de proyectos de los regulados a los que aplican las DISPOSICIONES Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del Sector Hidrocarburos oscila en 30,371 instalaciones existentes de proyectos(1), aunado a aquellos regulados que cuentan con permisos para los proyectos existentes a lo largo de los 50, 000 km de ductos de gas natural.

Que el artículo 31 de las DISPOSICIONES Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del Sector Hidrocarburos, establece que los Regulados deberán entregar a la Agencia un Programa para la Prevención y el Control Integral de las Emisiones de Metano del Sector Hidrocarburos, dentro de los tres meses posteriores a su elaboración e integración, acompañado del Dictamen Técnico emitido por el Tercero Autorizado por la Agencia.

Que el artículo 95 de las Disposiciones Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del Sector Hidrocarburos, establece que, los Regulados deberán entregar a la Agencia el Reporte Anual de Cumplimiento del Programa para la Prevención y el Control Integral de las Emisiones de Metano del Sector Hidrocarburos, acompañado por el Dictamen emitido por el Tercero Autorizado y que éste deberá ser entregado el primer trimestre de cada año calendario.

Que para que los Regulados puedan cumplir con la entrega del Programa para la Prevención y el Control Integral de las Emisiones de Metano del Sector Hidrocarburos y el respectivo Reporte Anual de Cumplimiento requieren contar los dictámenes que emitan los Terceros Autorizados por la Agencia; al respecto, no obstante que el 9 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria para obtener la autorización como tercero para emitir los dictámenes previstos en las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos, las medidas implementadas para hacer frente a la situación sanitaria generada por el coronavirus COVID-19, a partir del mes de marzo de 2020 han ejercido influencia en cuanto a la recepción de solicitudes de trámites para obtener la Autorización como Tercero para emitir los dictámenes previstos en las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos, por lo que a la fecha, la Agencia no cuenta con Terceros Autorizados para emitir los dictámenes previstos en las disposiciones en comento.

Que, en consecuencia, se determinó la necesidad de otorgar un plazo mayor a los Regulados que cuentan con Instalaciones nuevas e Instalaciones existentes de los Proyectos en las que se realicen las siguientes actividades del Sector Hidrocarburos: a) la exploración y extracción de hidrocarburos, b) el tratamiento, refinación y almacenamiento del petróleo, y c) el procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación, así como el transporte por ducto, almacenamiento y distribución de gas natural, con el propósito de permitir que se generen las condiciones para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 31 y 95 de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos.

Que con base a lo anterior, se expide el siguiente:

**ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 31 DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS  
DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL  
CONTROL INTEGRAL DE LAS EMISIONES DE METANO DEL SECTOR HIDROCARBUROS**

ÚNICO.- Se modifica el artículo 31 de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos, para quedar como siguen:

Artículo 1o. a Artículo 30. ...

Artículo 31. Los Regulados deberán entregar a la Agencia, un PPCIEM de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 de las presentes Disposiciones, a los 19 meses posteriores a su elaboración e integración, acompañado del Dictamen emitido por el Tercero Autorizado por la Agencia. El PPCIEM deberá ser presentado a la Agencia por los medios físicos, magnéticos o electrónicos que para tal efecto establezca.

Artículo 32. a Artículo 96. ...

**TRANSITORIOS**



PRIMERO.- a CUARTO.- ...

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, a los veintidós días del mes de junio de dos mil veinte.- El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Ángel Carrizales López.- Rúbrica.

1 Comprende pozos terrestres, plataformas marinas, refinerías, centros procesadores de gas, terminales de almacenamiento de GNL y FSRU (unidad flotante de almacenamiento y regasificación de GNL).

Del contenido del acuerdo reclamado, en lo que aquí interesa, se advierte que se modificó el artículo 31 de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos, **únicamente en cuanto al plazo** con que cuentan los Regulados (empresas productivas del Estado; personas físicas y morales de los sectores público, social y privado que realicen actividades reguladas y materia de la Ley de Hidrocarburos), para entregar el Programa para la Prevención y el Control Integral de las Emisiones de Metano del Sector Hidrocarburos (PPCIEM), **ampliándolo de tres, a diecinueve meses posteriores a la elaboración e integración de dicho programa**, relacionado con las actividades objeto de las referidas disposiciones (exploración y extracción de hidrocarburos; tratamiento, refinación y almacenamiento del petróleo; y, procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación, así como el transporte por ducto, almacenamiento y distribución de gas natural) respecto de las actividades del sector hidrocarburos que se desarrollan o se pretenden desarrollar, que ahí se precisan. Lo anterior, como parte de las acciones y mecanismos implementados para la prevención y el control integral de las emisiones de metano en el Sector Hidrocarburos.















*afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas”.*

De igual forma es aplicable por el criterio que sostiene la tesis aislada: 1a. CCLXXXI/2014 (10a.)<sup>6</sup> sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

**“INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO.** *Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del*

<sup>6</sup> Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2006963, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, página 148, Tipo: Aislada





sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la simple admisión de la demanda de amparo no representa un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiera del análisis de las constancias de autos, pues el suscrito juzgador está obligado a proceder en tales términos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 62 y 217 de la Ley de Amparo, este último en relación con la tesis jurisprudencial, publicada en el Semanario Judicial de la Federación “Octava Época, Numero 80, Agosto de 1994, página 87 de rubro **“IMPROCEDENCIA”**.”

Conforme a los razonamientos vertidos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la accionante constitucional.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252 del Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece:

**“SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.** No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio”.

Finalmente, se impone señalar que el sobreseimiento decretado en el presente juicio no implica una negación al derecho de acceso a la justicia, en virtud de que el estudio de los presupuestos de procedencia del juicio de amparo es de

estudio preferente y debe realizarse previo a cualquier pronunciamiento de fondo, sin que sea obligación del juzgador satisfacer las pretensiones del promovente, pues este debe realizar sus determinaciones con fundamento en la ley de la materia.

Sirve de apoyo, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, página 921, tomo XXIV, julio de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:

**“DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA.** Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico”.

Por lo expuesto y fundado, se **resuelve:**

**ÚNICO.** Se **sobresee** en el juicio.

**Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable, así como al agente del Ministerio Público de la adscripción, en términos del**







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:  
15051976\_0041000026864197029.p7m  
Autoridad Certificadora:  
Unidad de Certificación Electrónica del TEPJF - PJF  
Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	Jesus Coronel Montiel	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.08.7b	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	24/08/21 04:02:04 - 23/08/21 23:02:04	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	3a 37 ce a5 b0 ad 48 a3 4b f3 ba cd 56 f1 44 1c 04 17 00 70 9b d3 c7 9d 2d 81 39 0b 93 c2 b8 ff 1b c0 eb fc ee bf a6 c7 f2 f8 36 84 4d 94 3b 4b 40 d4 4b 11 4c 54 33 c6 e6 2f 8e e9 8b b2 9a d2 ee f3 3c 59 9c 0b 8f 95 75 23 e4 fa 88 30 41 5d 8d 46 bc 92 fe 5f cc 25 bc 94 3b 34 ac 21 e6 7a d1 ed 93 ab 31 fb 54 7a 72 2a d6 2e d3 c4 06 21 d5 32 d8 ea 05 dc c9 2d b0 78 d0 15 37 74 09 c4 dd c3 ac 9a b8 ab ac fe 96 27 9f ba 04 2f 59 03 8c 9d a7 84 fa 5a 53 69 5e 77 37 72 32 3f 2c 0b 4d a0 c7 3b 2a ca 86 32 20 41 79 5f 25 44 b3 29 cc c2 f7 c1 a4 bb c1 b7 80 1f fa 85 88 31 af 1a 08 7a 46 94 9f 73 35 0f 4d 86 82 ae dc ee 77 90 4e b4 74 8a d8 ce c8 66 34 2d 01 49 27 9c f9 23 51 da d3 0c 72 90 4f e2 e3 f6 c2 68 e1 e1 25 cd 70 ae a7 c4 e2 99 c1 c8 9b 87 ce 6a 94 e0 46 b4			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	24/08/21 04:02:04 - 23/08/21 23:02:04			
Nombre del respondedor:	OCSP de la Unidad de Certificación Electrónica del TEPJF - PJF			
Emisor del respondedor:	Unidad de Certificación Electrónica del TEPJF - PJF			
Número de serie:	30.30.30.32.33.30			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	24/08/21 04:02:04 - 23/08/21 23:02:04			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	67294077			
Datos estampillados:	Eb08W8pncHk8c6gDyb0ST2Q2D54=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
<b>Nombre:</b>	Carlos Alberto García López	<b>Validez:</b>	BIEN	Vigente
FIRMA				
<b>No. serie:</b>	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.01.17.fb	<b>Revocación:</b>	Bien	No revocado
<b>Fecha: (UTC/ CDMX)</b>	24/08/21 04:29:40 - 23/08/21 23:29:40	<b>Status:</b>	Bien	Valida
<b>Algoritmo:</b>	RSA - SHA256			
<b>Cadena de firma:</b>	21 69 58 8e 6e f8 e3 40 1f 56 8c 44 ee 34 89 20 be 11 81 8c 3c eb 0e 4c af 8a 9f a0 4c 4f f8 9c 15 1f b8 23 11 da f1 fa c7 e1 42 6d 6a b8 a5 d1 f8 0d 1c b9 4d 6a 98 19 f7 b2 72 69 68 5c 36 38 5a d4 65 42 2e 07 01 35 13 fb 6f 51 a6 ef 2b 7b 9a b2 a9 a7 78 50 79 6f c1 9b 6d 11 4e 96 ae 39 d1 94 81 cb aa c9 21 25 6c cb 05 23 1b c0 41 df 41 31 91 59 00 fb a3 48 ef e6 b4 8d 43 0f 79 9e b3 11 9f a6 6c 96 34 b6 fd 2d 51 96 af ef 30 46 de 1c ed 89 77 c8 ac fe cc 5c 5e e1 50 96 67 a3 67 d8 e2 35 a5 95 de 1b af 63 10 58 ef b5 48 7a 44 81 d5 ac 27 d3 7f 88 17 4e e8 c8 13 ef bf 15 b9 9c af 62 10 97 57 70 6b 04 05 2d b1 99 a6 06 00 23 a7 d5 35 86 94 c1 fc c8 0e 27 8d e9 12 bb 65 ea 1f 58 4d 75 8f a4 17 a4 f0 70 db 80 f7 6f d1 16 53 fa c2 73 ad 5c e2 15 00 31 b0 f2 37 3a			
OCSF				
<b>Fecha: (UTC / CDMX)</b>	24/08/21 04:29:40 - 23/08/21 23:29:40			
<b>Nombre del respondedor:</b>	OCSF ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Emisor del respondedor:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Número de serie:</b>	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
<b>Fecha : (UTC / CDMX)</b>	24/08/21 04:29:40 - 23/08/21 23:29:40			
<b>Nombre del emisor de la respuesta TSP:</b>	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Emisor del certificado TSP:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Identificador de la respuesta TSP:</b>	67297290			
<b>Datos estampillados:</b>	CT/0jKAX7avP61JjOD5En998LF0=			

El licenciado(a) Jes s Coronel Montiel, hago constar y certifico que en t rminos de lo previsto en los art culos 8, 13, 14, 18 y dem s conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci n P blica Gubernamental, en esta versi n p blica se suprime la informaci n considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.

PJF - Versi n P blica